



**Pacto Internacional
de Derechos Civiles
y Políticos**

Distr.
RESERVADA*

CCPR/C/80/D/1214/2003
30 de abril de 2004

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
80º período de sesiones
15 de marzo a 2 de abril de 2004

DECISIÓN

Comunicación N° 1214/2003

<i>Presentada por:</i>	Adrian Vlad (no representado por un abogado)
<i>Presunta víctima:</i>	El autor
<i>Estado Parte:</i>	Alemania
<i>Fecha de la comunicación:</i>	3 de junio de 2003 (presentación inicial)
<i>Fecha de adopción de la decisión:</i>	1º de abril de 2004

[Anexo]

* Se divulga por decisión del Comité de Derechos humanos.

Anexo

**DECISIÓN DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA
EN VIRTUD DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO
INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
-80º PERÍODO DE SESIONES-**

respecto de la

Comunicación N° 1214/2003*

Presentada por: Adrian Vlad (no representado por un abogado)

Presunta víctima: El autor

Estado Parte: Alemania

Fecha de la comunicación: 3 de junio de 2003 (presentación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 1º de abril de 2004,

Aprueba la siguiente:

Decisión sobre la admisibilidad

1. El autor de la comunicación, presentada los días 3 y 10 de junio y 22 de julio de 2003, es el ciudadano alemán Adrian Vlad, nacido el 28 de octubre de 1962 en Craiova (Rumania). Afirma que él y su familia son víctimas de violaciones por parte de Alemania¹ de los párrafos 1 y 3 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 14, los artículos 16 y 17, el párrafo 1 del artículo 23 y el artículo 26 del Pacto. No está representado por un abogado.

Los hechos expuestos por el autor

2.1. Entre 1995 y 2001, el autor alquiló un departamento perteneciente a la empresa de construcción GBO en Offenbach. En 1998, suspendió los pagos de cargos adicionales al alquiler aduciendo el derecho a retener pagos (*Zurückbehaltungsrecht*) sobre la base de que la GBO no

* Participaron en el examen de la presente comunicación los siguientes miembros del Comité: Sr. Nisuke Ando, Sr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Sr. Alfredo Castillero Hoyos, Sra. Christine Chanet, Sr. Franco Depasquale, Sr. Maurice Glèlè Ahanhanzo, Sr. Ahmed Tawfik Khalil, Sr. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, Sr. Martin Scheinin, Sr. Ivan Shearer, Sr. Hipólito Solari Yrigoyen, Sr. Roman Wieruszewski y Sr. Maxwell Yalden.

¹ El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo entraron en vigor para el Estado Parte el 23 de marzo de 1976 y el 25 de noviembre de 1993, respectivamente.

había cumplido su obligación de darle acceso a los recibos sobre los cuales se habían calculado los nuevos cargos por gastos corrientes. El 6 de septiembre de 1999, cuando los cargos impagos ascendían a 3.364,52 marcos, la GBO dio por terminado el contrato de alquiler unilateralmente e inició un proceso de desalojo y pago de la deuda en contra del autor y de su esposa, Kerstin Vlad.

2.2. Por sus sentencias de 9 de mayo de 2000, el Tribunal de Distrito de Offenbach ordenó al autor y a su esposa que desalojaran el departamento y pagaran los cargos adeudados, así como las costas. Las apelaciones que ambos presentaron al Tribunal Regional de Darmstadt fueron desestimadas el 14 de diciembre de 2000, también con costas. No se presentó ningún recurso constitucional contra las desestimaciones en el plazo de un mes a partir de la notificación de la sentencia, el 3 de enero de 2001.

2.3. El 7 de enero de 2001 el autor inició una acción penal contra los jueces de turno del Tribunal de Distrito de Offenbach así como contra el Tribunal Regional de Darmstadt, aduciendo que el hecho de que no hubieran interpretado y aplicado las leyes y normas sobre el control de los alquileres con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia (*Bundesgerichtshof*) y la Corte Constitucional Federal (*Bundesverfassungsgericht*) representaba una "perversión de la justicia". También amenazó con hacerse justicia por sí mismo. Los días 10 y 29 de enero de 2001, el Fiscal General se declaró incompetente para tratar de la cuestión. En una carta personal de 22 de enero de 2001, un funcionario superior de la Dirección de la Policía de Hesse Sudoriental aconsejó al autor que no complicara su situación y que tomara debidamente en cuenta el costo y las perspectivas de una acción constitucional.

2.4. El 1º de marzo de 2001 el Presidente del Tribunal Regional Superior de Francfort desestimó la acción del autor por daños y perjuicios respecto de las costas, sus gastos corrientes reembolsables y los gastos de su desalojo, aduciendo que las sentencias del Tribunal Regional de Darmstadt violaban manifiestamente la ley. Informó al autor de que Hesse no era responsable de las sentencias dictadas por sus jueces, a menos que la administración de justicia constituyera un delito en un caso concreto.

2.5. El 27 de marzo de 2001, la fiscalía de Darmstadt decidió no investigar las acusaciones del autor ante la falta de indicios de que los jueces de turno del Tribunal Regional de Darmstadt hubieran cometido un delito. Asimismo, el 29 de marzo de 2001 se desestimó la solicitud de ayuda jurídica formulada por el autor para apelar de la decisión del fiscal alegándose la falta de perspectivas razonables de éxito de ese recurso. Su apelación contra la decisión del fiscal se desestimó el 9 de julio de 2001 y se hizo lo propio con una nueva apelación el 4 de enero de 2002.

2.6. El 20 de abril de 2001 el autor dirigió peticiones al Ministro Federal de Justicia y al Presidente Federal para que intervinieran en su caso. Ante el rechazo de ambas peticiones, el autor inició una campaña de exhibicionismo frente al Ministerio Federal de Justicia y amenazó a la Presidencia Federal con prenderse fuego. El 12 de diciembre de 2001, el Tribunal de Distrito de Berlín-Tiergarten condenó al autor por intrusión por haber trepado la reja que rodea el edificio de la Presidencia Federal. No obstante, obedeciendo a una moción del autor, se dejó pendiente la causa tras la decisión del Tribunal de Distrito de ordenar un peritaje psiquiátrico a fin de determinar si se lo podía considerar penalmente responsable del delito. Por último se sobreseyeron definitivamente las actuaciones.

2.7. Entre tanto, el autor había presentado un recurso disciplinario al Ministerio de Justicia de Hesia en relación con la decisión del fiscal de 27 de marzo de 2001 de sobreseer su caso. El 30 de julio de 2001, el fiscal superior rechazó el recurso. Tampoco se aceptó la apelación del autor al Tribunal Regional Superior de Francfort por falta de un abogado capacitado para ocuparse de las actuaciones ante dicho Tribunal.

2.8. El 4 de agosto de 2001 se dictó una orden de detención del autor por no haber cumplido las sentencias del Tribunal Regional de Darmstadt. Por un correo entre organismos de 8 de febrero de 2002, el Tribunal de Distrito de Offenbach dio instrucciones a la policía de esa ciudad de detener al autor en caso de que no fuera enviado a un establecimiento psiquiátrico cerrado. En noviembre de 2002 se detuvo al autor después de que hubiera arrojado diversos documentos al Presidente Federal durante su visita a Offenbach. Posteriormente el autor presentó sin éxito peticiones a los Parlamentos Federal y de Hesia, así como al Canciller Federal.

2.9. El 8 de septiembre de 2003, el autor presentó un recurso constitucional contra la decisión del Fiscal General de Hesia de 1º de agosto de 2003 de rechazar una nueva apelación contra la desestimación de sus denuncias contra los jueces del Tribunal de Distrito de Offenbach y del Tribunal Regional de Darmstadt. En particular, el autor afirmó que el requisito de contar con un abogado para apelar de esta decisión ante un tribunal violaba su derecho constitucional de tener acceso a la justicia. El 17 de noviembre de 2003, el Registro de la Corte Constitucional informó al autor de que había registrado la denuncia mientras que anteriormente, el 24 de octubre de 2003, le había informado de que se tendría que declarar inadmisibile la denuncia por falta de fundamentos y porque no se habían agotado los recursos judiciales ni respetado el plazo para presentar el recurso constitucional.

La denuncia

3.1. El autor denuncia que se han violado los derechos que le confieren el párrafo 3 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 14, los artículos 16 y 17, el párrafo 1 del artículo 23 y el artículo 26 del Pacto, aduciendo que la mayoría de las acciones judiciales que inició se prolongaron indebidamente, que sus denuncias no se investigaron con seriedad, que se vigilan su correo y sus comunicaciones telefónicas y que el desalojo de su familia del departamento tuvo efectos negativos sobre su propia salud y la de su familia.

3.2. El autor afirma que se le negó acceso a los tribunales y que le impidieron agotar los recursos internos, ya que sólo tuvo un mes para presentar un recurso constitucional contra las sentencias del Tribunal Regional de Darmstadt de 3 de enero de 2001. Durante ese plazo, no pudo encontrar un abogado, en parte debido a las vacaciones de Año Nuevo. Además, afirma que la policía amenazó con ejecutarlo y que recibió amenazas de detención normal y psiquiátrica de parte del Tribunal de Distrito de Offenbach y del hospital municipal de la ciudad, respectivamente. Asimismo, el autor afirma que ninguno de los más de 40 abogados con los que se puso en contacto se había mostrado dispuesto a tramitar su denuncia penal de perversión de la justicia, lo cual refleja la impunidad *de facto* de los jueces alemanes.

3.3. El autor solicita una indemnización por los daños materiales que ha sufrido y el deterioro de su salud.

Deliberaciones del Comité

4.1. De conformidad con el artículo 87 de su reglamento, antes de examinar la reclamación que figura en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si dicha reclamación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

4.2. El Comité estima que, incluso suponiendo que las denuncias del autor no fueran inadmisibles porque no se han agotado los recursos internos, son inadmisibles porque el autor no se ha visto personalmente afectado por una presunta violación de cualquiera de las disposiciones del Pacto y porque las denuncias no entran en el ámbito de las disposiciones del Pacto que se invocan, o porque las denuncias no se han fundamentado a los fines de la admisibilidad.

5. Por consiguiente, el Comité de Derechos Humanos decide:

a) Que la comunicación es inadmisibile con arreglo a los artículos 1, 2 y 3 y al apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo;

b) Que la presente decisión se comunique al autor de la comunicación y, para su información, al Estado Parte.

[Adoptada en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original.
Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]